

Que se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada respecto de este juicio á 7 de Setiembre último por el Juzgado de Distrito de Yucatan, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Domingo Evia, contra los actos del Agente de Hacienda pública del partido de Izamal, que, con violacion del art. 16 constitucional, le cobra con apremio las contribuciones causadas por sus fincas rústicas «San Antonio» y «Buenavista».

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*J. José de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José S. Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José G. Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario

Es copia que certifico. México, Noviembre 20 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan, por la casa de comercio que gira en Mérida bajo la razon social de "Francisco Diego y Compañía," contra los actos del C. Tesorero municipal del puerto de Progreso, que le cobra 12½ ctvs. por cada uno de 412 cerdos, embarcados para la Habana.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

La casa mercantil que gira en esta Ciudad bajo la razon de "Francisco Diego y  
TOMO VII.—PARTE II.

Compañía", pide amparo en el ocurso que motiva este juicio, contra el acto de haberles cobrado el C. Tesorero municipal de Progreso doce y medio centavos por cada uno de cuatrocientos doce cerdos, que embarcaron en aquel puerto con destino al de la Habana; y cuya cantidad ascendente á sesenta y cuatro pesos cincuenta centavos, fué satisfecha en obvio de mayores perjuicios, como se hizo constar en la adjunta protesta.

El fundamento del ocurso consiste, en que aunque ese impuesto ha sido establecido por el Gobierno del Estado con el título de arbitrio municipal, es en realidad un verdadero derecho de exportacion que la fraccion 1ª del artículo 112 del Pacto federal prohíbe establecer sin consentimiento del Congreso de la Union; y que si con dicha contribucion se viola este artículo constitucional, con su cobro se infringe también la garantía que otorga el artículo 16 del propio Código fundamental de la República.

El Tesorero de los fondos municipales de Progreso contra quien se reclama este hecho, se limitó á rectificar el número de los cerdos por los cuales cobró el impuesto de que se trata, alegando que no fué por unos trescientos catorce como aseguran los quejosos, sino por cuatrocientos doce; pero conviniendo en que fueron embarcados por el vapor español "Don Quijote", y sin exponer una sola razon siquiera en defensa del decreto en virtud del cual hizo el repetido cobro, cuya anticonstitucionalidad parece que el mismo reconoce al concluir su informe, diciendo: "que si ha habido infraccion en las leyes que citan los quejosos, bien se deja ver que la culpa no ha sido suya".

Y en verdad que no podia decir otra cosa; porque, en concepto del Fiscal, siendo demasiado clara y terminante la prohibicion hecha á los Estados, en la cláusula 3ª del artículo citado, de establecer derechos de exportacion sin el consentimiento del Congreso Nacional, es incontrovertible la infraccion que de él se ha hecho con el referido decreto local que impone el gravámen reclamado

que, aunque se titula arbitrio municipal, es un verdadero derecho de exportacion, y el C. Tesorero de los fondos del municipio del puerto de Progreso al cobrarlos, ha infringido por su parte la garantía otórgada en el artículo 16 de la propia Constitucion federal; pues si el Gobierno del Estado ha sido incompetente para decretar ese impuesto, tambien lo es el funcionario que lo ejecuta para causar en las personas y posesiones de los quejosos, las molestias consiguientes á su ejecucion.

Así es que el infrascripto, fundado en los referidos artículos 16 y 112 del Código fundamental de la República, concluye pidiendo á usted sentencie este juicio declarando: que la Justicia de la Union ampara y protege á los Señores Francisco Diego y Compañía, del comercio de esta Ciudad, contra el hecho de cobrarles el C. Tesorero municipal del puerto de Progreso, el derecho de doce y medio centavos por la exportacion de cada una de las cuatrocientas doce cabezas de cerdos que embarcaron en el vapor español "Don Quijote" con destino á la Habana.

Mérida, Julio 31 de 1874.—*P. Higueros.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Mérida, Agosto 6 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por la casa mercantil que gira en esta Ciudad bajo la razon social de "Francisco Diego y Compañía", contra el C. Tesorero municipal del puerto de Progreso, por haberle cobrado doce y medio centavos por cada uno de cuatrocientos catorce cerdos que embarcó para la Habana en el vapor español "Don Quijote," con infraccion del artículo 112 de la Constitucion federal. Visto el informe de la autoridad infractora; el pedimento fiscal y la citacion para sentencia, con cuanto mas ver y consta de autos, y

Considerando: que aunque el referido Tesorero municipal alega que hizo el cobro dicho, respecto de cuatrocientos doce cerdos,

con arreglo á la ley de arbitrios municipales de aquel puerto; pero como el impuesto de que se trata no corresponde á derechos del Estado, por no ser de consumo, puesto que no se consumieron los puercos en el Progreso, sino que se exportaron en el vapor "Don Quijote," para la Habana, la cual toca al comercio de altura ó de exportacion, en el que los Estados no pueden imponer contribucion sin el consentimiento del Congreso de la Union.

Considerando: que por esta razon el funcionario municipal del Progreso, no es competente para verificar aquel cobro, violando, al hacerlo, el artículo 16 constitucional; resultando en consecuencia, haber infringido las fracciones 1ª y 3ª, aquel Tesorero, de la ley de 20 de Enero de 1869, porque invadió las atribuciones federales y violó las garantías individuales.

Por estos legales fundamentos y de conformidad con el parecer fiscal, fundado en el artículo 16 y en la fraccion 1ª del artículo 112 constitucionales, fraccion 1ª y 3ª de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, la autoridad en nombre de los Supremos Poderes, falla:

1º: La Justicia de la Union ampara y protege á la casa "F. Diego y Compañía" contra los actos del C. Tesorero municipal del Progreso, que le cobró doce y medio centavos por cada uno de cuatrocientos doce cerdos, embarcados para la Habana;

2º: Síquese testimonio de este fallo para publicar, y elévense los autos, en revision, á la Corte Suprema de Justicia, arreglado á los artículos 13 y 27 de dicha ley orgánica. Hágase saber.—*J. Manzanilla.*—Ante mí.—*José Anacleto Castillo.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Noviembre 10 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatán, por la casa de

comercio que gira en Mérida, bajo la razón social "F. Diego y Compañía," contra el Tesorero municipal del puerto del Progreso, que le cobra doce y medio centavos por cada uno de cuatrocientos eatorce cerdos que esa casa exportó para la Habana en el vapor español "Don Quijote;" y

Considerando: Que ese cobro se hace en virtud de una disposición relativa á ley de arbitrios municipales.

Que los Estados no pueden imponer contribuciones sobre la exportación sin consentimiento del Congreso general; y que por lo mismo, ese cobro importa la infracción del artículo 112 y la violación de la garantía á que se refiere el 16 de la Constitución general.

De conformidad con lo que disponen las fracciones 1ª y 3ª de su artículo 101, se decreta:

Que se confirma por sus propios legales fundamentos la sentencia pronunciada respecto de este juicio, á 6 de Agosto último, por el Juzgado de Distrito de Yucatán, que decia:

Que la Justicia de la Unión ampara y protege á la casa de "F. Diego y Compañía," contra los actos del Tesorero municipal del Progreso, que le cobra doce y medio centavos por cada uno de cuatrocientos doce cerdos embarcados para la Habana.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de Distrito que las elevó á revisión, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José S. Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José G. Ramírez.*—*L. M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 20 de 1874.—*H. Landá,* oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Zacatecas, por los CC. Diego Guerrero y socios, contra los actos de los CC. Presidente municipal de San José de la Isla y Castro y Gefe político de la Capital del Estado, por la prisión arbitraria impuesta á unos y la orden de aprehensión dictada contra los demás.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que con fecha 2 del presente mes, los CC. Diego Guerrero, Luis Rosales, Zenon García, Trinidad Saucedo, Cruz Landín y Antonio Gonzalez, solicitaron el amparo de la Justicia Federal contra los actos del C. Presidente municipal de San José de la Isla y Castro, que sin mandamiento que funde y motive la causa legal del procedimiento, ha ordenado su prisión, violando el artículo 16 de la Carta fundamental de la República, cuyo artículo 19 también se dice infringido respecto de Guillermo Ruiz de Esparza y Cecilio Hernandez, castigados por irrespetuosos, en uso de la facultad consignada en el artículo 67 del Reglamento económico-político de los partidos del Estado.

Negada la suspensión provisional del primero de los actos reclamados y rendido el informe de la autoridad inmediatamente encargada de ejecutarlos, resulta: que la orden de aprehender á los quejosos, con excepción de Antonio Gonzalez, fué determinada, por saberse que aquellos formaron parte de la reunión en que se profirieron insultos contra las autoridades del Estado, la noche del 26 de Julio último, cuya orden se ejecutó en Hernandez y Ruiz de Esparza, á quienes el C. Presidente municipal impuso una multa de cincuenta pesos, 6 en su defecto un mes de prisión, calificando de irrespetuoso el hecho de haber remitido directamente á